



MECANISMOS DE PRESIÓN DISFRAZADOS DE INTERESES COMUNITARIOS EN MÉXICO

Si bien las luchas sociales generalmente nacen de preocupaciones genuinas y pocas veces cuestionamos la legitimidad de quienes las defienden, para entender la toma de la planta BONAFONT en Puebla por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, es necesario tener presentes algunas contradicciones que rodean a los movimientos sociales en México.

En México, la lucha por la gestión de los recursos naturales se ha distinguido por la participación de tres grupos de actores interconectados entre sí.

- a) Primeramente, tenemos a las **comunidades indígenas** que reclaman autonomía en la custodia y gestión de los recursos naturales, sobre todo en mantos hídricos. Pese a que el fondo de sus cuestionamientos por la sobreexplotación es válido, ante un entorno de escasez y sequía, lo cierto es que en la lucha por la defensa del agua participan, cada vez más, grupos de presión dirigidos por líderes comunitarios que lo único que buscan es su propio beneficio y llegan a utilizar la extorsión de empresas y gobiernos como modo de vida.
- b) En segundo lugar, tenemos la participación de **científicos** que asesoran a las comunidades. Cuestionan, con argumentos, los posicionamientos institucionales de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).¹

No obstante, una visión que debiera ser objetiva, sustentada con cifras, datos y estudios precisos, se nutre cada vez más de información generada con sesgos políticos. De manera tal que vemos aseveraciones sin validez, que se niegan al escrutinio y confrontación de ideas con otros especialistas. Respaldados por la manipulación de comunidades y eventos de presión esgrimen su verdad como única y absoluta.

- c) En tercer lugar, tenemos a los **políticos** que atienden agendas particulares de grupos de presión, de poder y partidos que se encuentran tras bambalinas. De la mano con los científicos y liderazgos, pero en los más de los casos sin dar la cara, estos actores son pieza clave para poner en jaque a gobiernos locales y autoridades federales.

¹ Villegas, C (2021). La rebelión de los científicos, en pausa. Recuperado el 18 de octubre de Proceso ([ver](#)).



En medio de este escenario interconectado destaca la voz de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), relacionada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y exfuncionarios de alto nivel en el Gobierno federal en México. Esta organización se ha involucrado de manera activa en eventos realizados por las comunidades originarias en diversos estados, entre ellos Puebla y Veracruz, donde el creciente malestar social por la gestión de recursos acuíferos ha resultado en actos de vandalismo, toma de instalaciones y bloqueo de tramos carreteros.

En suma, comunidades originarias, académicos e investigadores y actores políticos mantienen una sinergia que utiliza las luchas sociales para buscar beneficios personales. Esta relación se ha potenciado en el marco de los cambios de gobierno en los estados, donde la confrontación por el poder y la transición se vuelven tierra fértil para el surgimiento de oportunistas sociales.

Actualmente, se utiliza la justicia social para lograr el posicionamiento de algunos cuantos en gobiernos municipales o, incluso y de manera más frecuente, el pago de cuotas a líderes manifestantes a fin de que se levanten las protestas en contra de empresas afectadas en estados de interés. Sin embargo, estos oportunistas sociales no mantienen una línea crítica definida pues se han pronunciado en contra de cementeras, mineras, proyectos energéticos, refresqueras, embotelladoras y desarrollos turísticos, al igual que se han opuesto a la construcción de proyectos insignia del presidente de México como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Aunado a esto, en el contexto actual, donde todo es político y todo es política, la redefinición del escenario a partir de las elecciones intermedias de 2021 que fueron las más grandes de la historia reciente y la antesala a los comicios de 2024², se han convertido en tierra fértil para el agravamiento de los esquemas de extorsión social por parte de grupos contrarios a proyectos estratégicos, a través de la venta de plazas en gobiernos locales y estatales. En este contexto, vale la pena cuestionarse: ¿de quién –realmente– es la voz pública?, aquella que crecientemente se escucha en foros y medios de comunicación, pero, a su vez, inestabiliza los contextos locales bajo pretensiones de justicia social.

Más allá de la presencia de las comunidades originarias, la academia y funcionarios de los tres niveles de gobierno en las pugnas –a veces invisibles al público– por la custodia y gestión de los recursos naturales a nivel nacional, es la tergiversación del activismo en extorsión social lo que

² En julio de 2021 se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. Se celebraron elecciones de alcaldes y Congresos Locales en casi la totalidad de los 32 estados (solo Durango e Hidalgo no eligieron alcaldes y Coahuila y Quintana Roo no eligieron Diputados Locales). En total se eligieron 21,368 cargos. 3000 cargos más de los que se eligieron en el 2018”.



representa un riesgo al desarrollo y continuidad de operaciones en proyectos estratégicos a nivel nacional.

Por tanto, la generación de relaciones productivas entre las empresas y los líderes comunitarios reales; el monitoreo del entorno; y la identificación oportuna de solicitudes y o quejas de vecinos e integrantes de las comunidades aledañas a las operaciones, son actividades cruciales para prevenir el surgimiento de actores oportunistas que, eventualmente, ponga en riesgo la continuidad operativa de las empresas.

EL MOVIMIENTO SOCIAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA

UNA HISTORIA DE CHANTAJE Y AMENAZAS A PRESIDENTES MUNICIPALES

Una forma de vivir de los integrantes del movimiento: dinero a cambio de dejarte gobernar.

- En Juan C. Bonilla existe un movimiento que se autonombra como “social”, integrado por dos organizaciones: el “Frente de Pueblos en defensa del la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala” (FPDTA-MPT) y “Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes” (PURCV). Estos grupos, que operan bajo un esquema de presión social, extorsionan a empresas para dejarlas operar y a los presidentes municipales para dejarlos gobernar.
- Los presidentes municipales han sido presionados para dar a los líderes del supuesto movimiento lo que le piden, de lo contrario llevan a cabo actividades de intimidación a él y a su familia, y durante su periodo de gobierno será presa de la difamación, a través de chismes infundados que se transmiten de boca en boca o mediante la radio comunitaria, la cual la controla el movimiento.
- No obstante, las historias de cada presidente han sido distintas, lo que es innegable, es que todos han sido presa de los chantajes de este grupo. Mientras que Luis Aguas, que gobernó Juan C. Bonilla de 1999 a 2002, se convirtió en socio de Miguel López Vega, alias “La Tuza” y Alejandro Torres Chocolatl alias “El Pollo” en Radio Zacatepec y comparte con ellos parte de los beneficios de algunas de sus extorsiones, lo cierto es que en muchos casos no comulga con los planteamientos de agresión e ilegalidad del movimiento. El problema de fondo es que la mayoría de los presidentes han tenido que ceder a sus amenazas para poder gobernar. Es bien sabido que el Dr. Filemón Aguilar quiso hacerlo diferente cuando fue presidente municipal y decidió no ceder a las presiones del



movimiento, las cuales consistían en darles 4 o 5 plazas de buen nivel a los integrantes de movimiento, que se convertirían en aviadores y cobrarían sin trabajar. Prefirió no hacerlo porque sabía que cada plaza era importante, tampoco cedió en darles el dinero ni los recursos en especie que le exigían. Desafortunadamente, el peso de su decisión le costó caro. Las oficinas de la presidencia fueron tomadas en diferentes ocasiones durante mucho tiempo. El movimiento lo difamó, lo señaló como “ratero” y ejerció presión política al gobierno estatal para que realizaran una auditoria. Lo acusaron también de vender el agua de Juan C. Bonilla. Bloquearon la autopista federal en repetidas ocasiones. No les importó que saliera limpio de la auditoría y dijeron que era un corrupto, lo amenazaron a él y a su familia y al terminar de su gestión, fueron a vandalizar su casa, rompieron todos los vidrios y llevaron un camión de cemento que vaciaron en el frente de la casa. Tanto en la comunidad como en el gobierno estatal conocieron la historia y nadie hizo nada.

DEJARON A JUAN C. BONILLA SIN AGUA POTABLE, CONDENANDOLO AL SUBDESARROLLO

- De acuerdo con cifras de INEGI y con el Informe de Pobreza y Rezago 2021, el 19.2% de la población de Juan C. Bonilla no dispone de agua potable y el 81.7% de viviendas no les llega agua entubada de una red pública. La mayoría de los hogares se continúan abasteciendo con el sistema de pozos artesanales y norias, que, desafortunadamente es un modelo de abasto que tiende cada vez más a ser insuficiente y verse afectado, por el crecimiento de la población, por el cambio climático y la contaminación.
- Según declaraciones de pobladores, desde 2019, el agua para consumo humano ha tenido temporadas en las que registra malos olores, tiene sabor a metal y ha generado enfermedades gastrointestinales en niños, mujeres y hombres.
- A decir de la misma población lo anterior se debe a que las descargas residuales que generan las empresas de autopartes y textiles instaladas entre los municipios de Juan C. Bonilla y Huejotzingo incumplen las normas de SEMARNAT y Conagua, generando efectos nocivos evidentes. Los habitantes de la Junta Auxiliar de Zacatepec son los más afectados y se ven obligados a comprar pipas de agua potable, porque los pozos tienen agua contaminada.
- Con la intención de buscar solución de fondo al reto del agua en Juan C. Bonilla, desde la administración de José Romero Tehuitzil (2008 – 2011), se planteó en el Plan de Desarrollo



Municipal lograr el abasto de agua potable para Juan C. Bonilla y sus localidades. Para ello se requería contar con un Sistema Operador de Agua Potable Municipal, que también podía encargarse del drenaje, alcantarillado y saneamiento.

- Así, José Romero logró avanzar con el tema del drenaje y alcantarillado, obra que ha servido mucho para toda la gente, pero quiso dar un paso más e ir por la instalación de la red de agua potable y logró conseguir los recursos para las obras públicas de la red de agua. Obtuvo la aprobación de más de 35 millones de pesos, pero el movimiento de defensa del agua y la tierra se opuso, con el argumento de que era mejor seguir usando los pozos artesanales. Sin importar que este sistema de abasto representara carencias en el futuro y que significara limitar su desarrollo y oportunidades para el futuro de las nuevas generaciones.
- Una vez más, Miguel López Vega, Alejandro Torres Chocolatl y los líderes del movimiento bloquearon carreteras, tomaron la presidencia municipal e impidieron que el municipio contara con este servicio, condenándolo al subdesarrollo.



LA TOMA DE LA PLANTA BONAFONT DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

El pasado 22 de marzo, aproximadamente 240 personas cerraron por completo la Carretera Federal México-Puebla y la empresa Bonafont, en el municipio Juan C. Bonilla. Los manifestantes acusan públicamente a Bonafont de realizar saqueos a los mantos freáticos por más de 20 años, lo cual presuntamente ha generado escasez y sequía del agua en los pozos artesanales de la zona de los volcanes.

Ante esta situación Bonafont ha compartido que obtiene el agua de un único pozo en dicha localidad, a más de 150 metros de profundidad, lo que permite que los recursos hídricos sean protegidos y no se impacten los mantos superficiales ni los servicios de agua potable que utiliza la comunidad. También, se ha mostrado que la planta opera de manera independiente al suministro de agua del municipio y que el acuífero que nutre el pozo de la planta se encuentra con balance positivo, es decir con volumen de agua disponible, de acuerdo con el estudio realizado por la CONAGUA (Dic 2020) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Finalmente, Bonafont tiene concesionada la obtención únicamente del 0.1% del agua del acuífero Valle de Puebla, es decir una mínima parte de este. Concesiones federales otorgadas por CONAGUA cuyos permisos están publicados en su sitio web (Puebla, clave 2104, en el Estado de Puebla, Región Hidrológico-Administrativa Balsas).

Lo anterior deja en evidencia que la escasez de agua que exponen los manifestantes no es una situación provocada por la operación de la compañía. Por lo cual el motivo del cierre de la planta es injustificado y no atiende a una solución para la problemática.

EL GRUPO DE MANIFESTANTES

Desde inicios del movimiento se identifican organizaciones con intereses políticos encabezadas por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Los Pueblos Náhuatl Unidos de la Región Choluteca, Pueblos Unidos contra la Privatización de Agua (PUCPA) y otras asociaciones civiles.



Los principales liderazgos del movimiento han participado en otros eventos de manifestación contra importantes proyectos en el estado como el Parque Industrial Textil de Huejotzingo, el Gaseoducto del Proyecto Integral Morelos y el proyecto Hidroeléctrico Coyolapa – Atzala.

Algunos de los manifestantes son agremiados de las organizaciones 5 de Mayo Almecatla, 11 de Septiembre Almecatla y al Movimiento Poblano de la Cuarta Transformación, encabezado por Jorge Méndez Spínola y Rosa Márquez Cabrera, regidora con licencia en el Ayuntamiento de Puebla (quienes pertenecen al partido MORENA); ambos padres del ex Secretario de Gobernación David Méndez Márquez. El Movimiento Poblano de la Cuarta Transformación se ha caracterizado por ser opositor al gobierno en turno de Puebla, el cual, a pesar de pertenecer al mismo partido político los ha señalado como sus principales adversarios en el estado y los creadores de movimientos de desestabilización del estado.

Se percibe el apoyo, desde la Academia y de los movimientos de la ecología política a nivel nacional. Sin embargo, éste ha estado disminuyendo luego de que en diversos medios se ha ventilado la participación de grupos vinculados con corrientes como la de Víctor Toledo, Ex secretario de la SEMARNAT, quien dejó su cargo durante el presente año luego de diversos escándalos donde cuestionaba algunos de los proyectos emblema del presidente de México.

LAS ACCIONES DE LA EMPRESA

La empresa y el sindicato, en conjunto, **han buscado el diálogo con los manifestantes** al menos en seis ocasiones. Sin embargo, la reacción de los manifestantes ha sido negativa y han, incluso, amenazado a los colaboradores que se han acercado al plantón. En los acercamientos se ha manifestado que la empresa tiene disposición total de establecer una mesa de diálogo con los manifestantes y las autoridades que permita discutir la elaboración de proyectos en colaboración, entre autoridades, comunidad y empresa, para atender las preocupaciones de la población.

Se han tenido **más de 25 llamadas y reuniones de trabajo** presenciales con el gobierno del estado y autoridades federales para manifestar la situación y solicitar su colaboración en la solución del conflicto.

A través de dichas reuniones se ha logrado:

- **Solicitar la intervención del gobierno de Puebla para buscar un diálogo** con los manifestantes. En reiteradas ocasiones, la Secretaría de Gobernación de Puebla se acercó al movimiento para establecer un diálogo. Sin embargo, en todo momento los



manifestantes se negaron a escuchar a las autoridades. Por lo anterior, el gobernador del estado concluyó que era un grupo con el que no se podía dialogar.

- **Presentar denuncias a nivel local y federal** por delitos de robo, conato de incendio, bloqueo de carreteras, entre otros. La empresa ha sido muy cautelosa en el impulso procesal y en buscar que las autoridades deslinden responsabilidades para evitar el fortalecimiento de la narrativa que han buscado posicionar los manifestantes de que se está “criminalizando la protesta social”. La empresa ha solicitado en reiteradas ocasiones el apoyo del gobierno del Estado para evidenciar los delitos cometidos en flagrancia.

EL IMPACTO

Analistas políticos y económicos han afirmado que el problema que prevalece en las instalaciones de Bonafont, en Juan C. Bonilla, ha provocado que se ahuyenten algunas inversiones para el estado de Puebla.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Puebla, dijo que el hecho de que no se haga valer el estado de derecho en empresas como Bonafont, genera incertidumbre a inversionistas que ya tienen capital en la entidad poblana. El presidente de este organismo empresarial Luis Espinosa Rueda, detalló que la empresa Bonafont cuenta con todos los permisos en orden y no se entiende por qué un grupo pueda llegar y cerrar una empresa donde la autoridad no hace nada.

PERSPECTIVAS

Se tiene la convicción de que si el movimiento sigue debilitándose y se logra exhibir que no hay intereses legítimos, sino que fueron impulsados y solapados por causas políticas, el gobierno federal y estatal podrán confirmar ante la opinión pública que los supuestos ambientalistas que cuestionan al gobierno no tienen bases sociales.

ATENTAMENTE

**ALEJANDRA MENDOZA FRIAS
PRESIDENTA
FUNDACIÓN MEXICO SUSTENTABLE**